

REPÚBLICA DE COLOMBIA



TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Santiago de Cali, Dieciséis (16) de septiembre de dos mil veinte (2020)

Auto Interlocutorio

MAGISTRADA PONENTE: ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES

ASUNTO:	IMPEDIMENTO
MEDIO DE CONTROL:	NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-LABORAL
REFERENCIA:	76111-33-33-002-2019-00224-01
ACCIONANTE:	LUZ MARINA BEJARANO RUBIO demandas@sanchezabogados.com.co
ACCIONADO:	NACIÓN-FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN
ASUNTO:	AUTO QUE DECLARA FUNDADO EL IMPEDIMENTO DEL JUEZ SEGUNDO ADMINISTRATIVO ORAL DE BUGA

I. OBJETO

Decide el Tribunal, a través de la Sala de Decisión conformada por los magistrados, **ZORANNY CASTILLO OTALORA, VICTOR ADOLFO HERNANDEZ DIAZ y ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES**, ésta última como ponente, sobre la consulta de impedimento manifestado por el Juez Segundo Administrativo Oral del Buga en aplicación del numeral 1 del art. 141 del Código General del Proceso, para conocer del presente asunto.

II. ANTECEDENTES

La parte actora mediante apoderado judicial instauró el medio de control denominado nulidad y restablecimiento del Derecho contemplado en el artículo 138 del CPACA, solicitando la nulidad de los actos administrativos SRAP-31000-520 del 27 de noviembre de 2018, SRAP-31000-095 del 26 de marzo de 2019 y la resolución No. 2 -1316 del 28 de mayo de 2019 y 2-1079 del 08 de mayo de 2019, por medio de los cuales le negaron el reconocimiento de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 382 de 2013.

A título de restablecimiento, solicita se le ordene a la Fiscalía General de la Nación, reconocerle y cancelarle la bonificación judicial con las mismas condiciones y valor salarial que devengan sus homólogos que hacen parte del régimen salarial y

prestacional Especial de la Fiscalía General de la Nación, además que esta bonificación se tenga en cuenta como factor salarial para todos los efectos legales y que conforme a esto se ordene el reajuste y pago debidamente indexado de todas las primas y prestaciones causadas y que se causen a futuro, como las Primas de Servicios, Primas de Vacaciones, Primas de Navidad, Auxilio de Cesantías, Intereses de Cesantías, Primas de Productividad, Bonificación por Servicios Prestados y la totalidad de las prestaciones.

II.1. IMPEDIMENTO

El Juez Segundo Administrativo Oral de Buga, mediante Auto Interlocutorio nro. 524 del 08 de noviembre de 2019 (fl.23), se declaró impedido para conocer de éste asunto, señalando la causal de recusación prevista en el artículo 141 numeral 1, del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 130 del CPACA, toda vez que le asiste un interés directo en las resultas del proceso, ordenando su remisión a esta corporación con el fin de que se decidiera el impedimento que comprende a todos los Jueces Administrativos al tratarse de un asunto de incidencia salarial y prestacional para los funcionarios judiciales.

III. CONSIDERACIONES

El artículo 130 del C.P.A.C.A, definió las causales de impedimento, tal normativa dispuso:

“Causales. Los magistrados y jueces deberán declararse impedidos, o serán recusables en los casos señalados en el artículo 150 del Código de Procedimiento Civil y, además, en los siguientes eventos: ...”

Así, el numeral 2° del artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, estableció la regla para dar trámite del impedimento, señala:

“...Si el juez en quien concurra la causal de impedimento estima que comprende a todos los jueces administrativos, pasará el expediente al superior expresando los hechos en que se fundamenta. De aceptarse el impedimento, el Tribunal designará conjuez para el conocimiento del asunto.”

En el presente caso el Juez Segundo Administrativo Oral de Buga fundamenta su impedimento en el numeral 1° del artículo 141 del Código General del Proceso, que señala:

“Son causales de recusación las siguientes:

Tener el juez, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro del Primero grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil interés directo o indirecto en el proceso.”

Al respecto, sobre éste tema el Consejo de Estado, en un principio determinó¹ :

“... es preciso señalar, que el artículo 141 del Código General del Proceso, enumera las causales de recusación que excusan al fallador para el conocimiento de un determinado asunto y con fundamento en las cuales debe declararse el impedimento sobreviviente. Sin embargo, la taxatividad y orden restrictivo que les confirió el legislador a dichas causales, impiden que fuera de ellas subsista motivo alguno para que el juez se abstenga de cumplir los deberes que la ley le asigna y a su vez exigen que la motivación a los hechos que originan el impedimento se enmarquen con toda precisión dentro de alguna de ellas, lo cual obedece además, a la especificidad con la que se encuentran definidas en la norma. (...)

Ahora bien, examinado el expediente conjuntamente con la causal alegada, la sala estima infundado el impedimento manifestado, pues, la ley 4 de 1992 estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de las Fuerzas Públicas y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores oficiales, en la cual incluyó a los magistrados de los tribunales Contencioso administrativo, excluyendo a los funcionarios que optaron por la escala salarial de la Fiscalía General de la Nación.

La misma ley 4 de 1992 excluyó a los empleados que optaran por la escala salarial e la Fiscalía General de la Nación, por la cual se expidieron los decretos 53 y 109 de 1993, que fijaron el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la entidad mencionada, los cuales rigen para estos.

Teniendo en cuenta lo anterior, observa la Sala que las disposiciones que regula el tema salarial de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, no se relaciona con las normas aplicables a los funcionarios de la rama, como son los magistrados del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca que manifestaron su impedimento.

En conclusión, dicho evento no atenta contra la imparcialidad del juez, dado que con el resultado del proceso en ningún momento beneficiaría a los solicitantes del impedimento”

La Sala venía orientándose a declarar infundado este tipo de impedimento atendiendo las mismas razones que en otrora sostenía nuestro órgano de cierre, razonamiento con cargo al cual afirmaba esta Sala, **que no existía realmente un precedente definido y por tanto que tuviese el carácter de obligatorio**, amén de la precariedad (ausencia de conjueces) con la que actualmente cuenta la administración de justicia para definir en un plazo razonable un derecho que reclama el justiciable, situación que motivaba a esta Sala de Decisión aún más, a continuar con la nueva postura transliterada con anterioridad.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Sala de Decisión bajo la misma línea argumentativa – aplicación del precedente - se siente forzada a cambiar la postura que hasta hoy venía sosteniendo, acatando nuevamente el precedente que sobre la materia ha

¹ Radicado 76001233300020150019401 (4417-2015) del 2 de diciembre de 2015, Magistrada Ponente Sandra Lisset Ibarra Velez

impuesto nuestro órgano de cierre en la **actualidad** que al igual que a los suscritos, motivó a “**replantearla**” bajo los siguientes argumentos:

*“Encontrándose el proceso para decidir el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la Fiscalía General de la Nación, los suscritos Consejeros encuentran que se presenta una de las causales de impedimento previstas en el Código General del Proceso para conocer del presente asunto, por cuanto pese a **que dentro del sub lite, a través de auto del 19 de octubre de 2017², se declaró infundado el impedimento manifestado por los Magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca en tanto la demandante es beneficiaria del régimen salarial especial de la Fiscalía General de la Nación contemplado en el Decreto 53 de 1993³, dicha postura se replanteará en esta oportunidad procesal, por las razones que pasan a exponerse:***

7. Lo pretendido por la demandante es el reconocimiento de la prima especial de servicios y la bonificación por compensación como factor salarial, a efectos de que se ordene la reliquidación de sus prestaciones sociales con base en dichos emolumentos y la correspondiente indexación.

8. Ahora bien, como se expuso, la actora está regulada por el régimen especial de la Fiscalía General de la Nación, en cuyo artículo 4º *ibídem* contempló la denominada «prima especial, sin carácter salarial»; por consiguiente, se encuentra contemplada en una disposición diferente a aquella que contempló dicho emolumento para los magistrados, entre otros, del Consejo de Estado, pues de ello se ocupó el legislador a través del artículo 15 de la Ley 4ª de 1992⁴.

9. De lo anterior, se extrae que si bien una y otra prima especial se encuentran reguladas en instrumentos normativos diferentes, lo cierto es que el objeto de discusión en este proceso es el **carácter salarial** del porcentaje devengado a título de prima especial de servicios, que no ha sido tenido en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales, lo que podría conllevar a un beneficio para los Magistrados que integran esta Corporación.

10. En cuanto a la bonificación por compensación, se trata de aquella contemplada en el Decreto 610 del 30 de marzo de 1998⁵, por el cual creó en el artículo 1º «una bonificación por compensación, con carácter permanente, que sumada a la prima especial de servicios y a los demás ingresos laborales actuales iguale al 60% de los ingresos laborales que por todo concepto perciben los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Corte Constitucional y Consejo Superior de la Judicatura», de la cual serían destinatarios: i) los Magistrados de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, Contencioso Administrativo, Nacional y Superior Militar; ii) los Magistrados Auxiliares de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado; iii) los Abogados Auxiliares del Consejo de Estado; iv) los Fiscales y Jefes de Unidad ante el Tribunal Nacional; v) los Fiscales del Tribunal

² Folios 133 y 134 del expediente.

³ « Por el cual se dictan normas sobre el régimen salarial y prestacional para los servidores públicos de la Fiscalía General de la Nación y se dictan otras disposiciones.»

⁴ «Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los Trabajadores Oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.

[...]

ARTÍCULO 15. Los Magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado, el Procurador General de la Nación, el Contralor General de la República, el Fiscal General de la Nación, el Defensor del Pueblo y el Registrador Nacional del Estado Civil tendrán una prima especial de servicios, **sin carácter salarial**, que sumada a los demás ingresos laborales, igualen a los percibidos en su totalidad, por los miembros del Congreso, sin que en ningún caso los supere. El Gobierno podrá fijar la misma prima para los Ministros del Despacho, los Generales y Almirantes de la Fuerza Pública.» Aparte tachado 'sin carácter salarial' declarado INEXEQUIBLE por la Corte Constitucional mediante Sentencia C-681-03 de 6 de agosto de 2003, Conjuez Ponente Dra. Ligia Galvis Ortiz. Además el fallo establece:

⁵ «por el cual se establece una bonificación por compensación de los Magistrados de Tribunal y otros funcionarios».

Superior Militar, vi) los Fiscales ante el Tribunal de Distrito y los jefes de Unidad de Fiscalía ante Tribunal de Distrito.”⁶

Con fundamento en lo anterior, la postura que venía sosteniendo el Consejo de Estado dio un giro inesperado que a la postre, conlleva ineluctablemente a cambiar la postura que venía sosteniendo esta Sala de Decisión y por tanto, se puede concluir que al igual que en el caso de marras, lo que se discute es, entre otros, el carácter salarial de la bonificación judicial contemplada en el Decreto 382 de 2013, pretendiendo que dicho factor se tenga en cuenta para efectos de liquidación de prestaciones sociales; referente normativo que igualmente se encuentra contemplada para los Jueces en el Decreto 383 de 2013 en idénticos términos, veamos:

Decreto 382 de 2013 Art. 1º	Decreto 383 de 2013 Art. 1º
Artículo 1º. Créase para los servidores de la Fiscalía General de la Nación a quienes se aplica el régimen salarial y prestacional establecido en el Decreto número 53 de 1993, y que vienen rigiéndose por el Decreto número 875 de 2012 y por las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial , la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.	Artículo 1. Créase para los servidores de la Rama Judicial y de la Justicia Penal Militar a quienes se les aplica el régimen salarial y prestacional establecido en los Decretos 57 y 110 de 1993, 106 de 1994, 43 de 1995 y que vienen rigiéndose por el decreto 874 de 2012 y las disposiciones que lo modifiquen o sustituyan, una bonificación judicial , la cual se reconocerá mensualmente y constituirá únicamente factor salarial para la base de cotización al Sistema General de Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Nótese como entonces en los dos preceptos normativos prima la misma proposición jurídica para el reconocimiento de la aludida bonificación judicial, y de contera, la discusión en uno y otro caso será tener como **factor salarial la bonificación judicial para efectos de la liquidación de prestaciones sociales.**

Examinando los supuestos antes señalados, y al establecerse una postura frente a la normatividad que regula el régimen salarial de los empleados de la rama judicial, considera esta Sala de Decisión que se configura la causal invocada por el Juez Segundo Administrativo Oral de Buga, toda vez que como funcionarios de la rama judicial tienen un interés directo en el planteamiento y resultado de la acción, puesto que se encuentra sometido, desde el punto de vista salarial, a las mismas previsiones que emanan de los referidos preceptos normativos.

De igual manera, debe tenerse en cuenta que el titular del Despacho Judicial considera inmerso en dicha causal a los demás Jueces Administrativos del Circuito de Buga, asistiéndole la razón en ello, toda vez que notoriamente los efectos del proceso

⁶ Providencia de la Sala Plena de la Sección Segunda del 27 de septiembre de 2018 Expediente N°: 25000-23-42-000-2016-03375-01 (2369-2018) Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ

que se ventila en sede judicial interesa a los demás funcionarios judiciales, motivo por el cual, en virtud del numeral 2 del Artículo 131 de la Ley 1437 de 2011, se remitirá el expediente a la Presidencia del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca para que efectúe el sorteo y la designación del conjuer respectivo.

En razón de lo expuesto, el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el Juez Segundo Administrativo Oral de Buga, el cual se hace extensivo a los demás Jueces Administrativos del Circuito de Buga, de conformidad con la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO. REMITIR a la Presidencia de esta Corporación para sorteo del conjuer que ha de conocer el proceso.

Esta decisión fue discutida y aprobada en Sala Virtual de la fecha, según consta en acta que se entrega a la Secretaría de la Corporación por medios virtuales, atendiendo las circunstancias de salubridad pública que se presentan en el país a raíz del COVID-19.

Los Magistrados,


ANA MARGOTH CHAMORRO BENAVIDES
Magistrada


VÍCTOR ADOLFO HERNÁNDEZ DÍAZ
Magistrado


ZORANNY CASTILLO OTALORA
Magistrada